



Exp.: 001-00082037 Ley de Transparencia  
Asunto: Exp. 47/2023 LGT-SGAT

## RESOLUCION

**VISTO** el expediente administrativo iniciado por solicitud de acceso a información pública presentada por [REDACTED] y teniendo en consideración los siguientes

## ANTECEDENTES DE HECHO

**Primero:** Con fecha 7 de septiembre de 2023 tuvo entrada en este Organismo, a través de la Unidad de Información de Transparencia de este Ministerio, escrito de petición de [REDACTED], de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre (BOE del 10), de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, quedando registrada con el número **001-00082037**.

**Segundo:** El contenido de la solicitud es el siguiente:

*"Estimada Inspección de Trabajo y Seguridad Social, En virtud del artículo 2.1 de la ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, que incluye a la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local entre los sujetos de ámbito de aplicación, y el artículo 13 de la misma, que entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones, solicito:*

*Las estadísticas de denuncias presentadas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en 2015 y 2022 con información sobre:*

- El nombre o razón social del denuncia y el domicilio social o, en su defecto, el centro de trabajo del denunciado*
- Actividad y código del CNAE desglosado a 2 dígitos*
- Número de denuncias sobre el centro de trabajo*
- Número de denuncias que resultaron en infracción, número en trámite o número de desestimadas para cada centro de trabajo*

*Las estadísticas de las infracciones en 2015 y 2022 desglosadas por:*

- El nombre o razón social del denuncia y el domicilio social o, en su defecto, el centro de trabajo del denunciado*
- Actividad y código del CNAE desglosado a 2 dígitos*
- Materia de la infracción (Seguridad Social, Prevención de Riesgos Laborales, Relaciones Laborales, Empleo y Extranjería y Otras*

CORREO ELECTRÓNICO/WEB:

[itsssgat@mites.gob.es](mailto:itsssgat@mites.gob.es)  
[www.mites.gob.es/itss](http://www.mites.gob.es/itss)

Página 1 de 7

Pº de la CASTELLANA, 63  
28071 MADRID  
TEL: 91 363.11.63/64/64/30393  
DIR:EA0021862

CSV :

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>  
FIRMANTE(1) : CARMEN COLLADO ROSIQUE | FECHA : 11/10/2023 09:56 | Sin acción específica





**actuaciones)**

**-Motivo concreto de la sanción (Discriminación por razón de sexo u otros motivos, condiciones de seguridad, trabajadores extranjeros sin autorización, falsos becarios o trabajo no declarado, etc.)**

**-Importe de la sanción**

**En el caso de que se me deniegue o no se entregue parte de lo solicitado, esto no es óbice para no entregar el resto de lo pedido. Recuerdo la existencia del derecho de acceso de forma parcial.**

**Les agradecería que me hicieran llegar la información en un formato reutilizable, preferiblemente .csv, .txt, .xls, .xlsx o cualquier base de datos para evitar así cualquier acción previa de reelaboración según el criterio interpretativo CI/007/2015 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Si no fuera posible, solicito los datos tal y como consta en los registros públicos (PDFs, documentos en papel, ...), para evitar cualquier acción de reelaboración.**

**Muchas gracias,**

**Quedo a su disposición para las aclaraciones que estimen oportunas."**

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

**Primero:** La Directora del Organismo público Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene atribuida la competencia para conocer y resolver el presente expediente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 17 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre (BOE del 10), de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en la medida que dicho órgano es el que posee la información solicitada.

**Segundo:** El artículo 12 de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b de la Constitución Española, precepto que es desarrollado por la citada Ley.

**Tercero:** Respecto de la petición concreta hay que señalar que su contenido se refiere a las "estadísticas de denuncias presentadas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en 2015 y 2022" y "estadísticas de las infracciones en 2015 y 2022", todo ello desglosado por municipio y provincia, actividad económica, materia, entre otros datos.

También solicita información detallada sobre "nombre o razón social del denunciante (entendemos que se refiere a la persona denunciante) y el domicilio social o, en su defecto, el centro de trabajo del denunciado".

Por tanto, lo que desea conocer [REDACTED] entre otras cuestiones que analizaremos en puntos posteriores, es la identidad del/la denunciante y del/la denunciado, pudiendo ser este último persona física o jurídica.

MINISTERIO  
DE TRABAJO  
Y ECONOMÍA SOCIAL



CSV :

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : CARMEN COLLADO ROSIQUE | FECHA : 11/10/2023 09:56 | Sin acción específica





A este respecto debemos realizar un breve análisis normativo de la regulación nacional e internacional que vincula al Estado español y, por ende, a este Organismo.

a.- Normas internacionales:

Como punto de partida, debemos señalar que el Convenio nº 81 de la OIT (ratificado por España el 30 mayo de 1960 y actualmente en vigor), relativo a la inspección del trabajo en la industria y el comercio, en su artículo 15 apartado c, establece que: ***“los inspectores del trabajo deberán considerar absolutamente confidencial el origen de cualquier queja que les dé a conocer un defecto o una infracción de las disposiciones legales, y no manifestarán al empleador o a su representante que la visita de inspección se ha efectuado por haberse recibido dicha queja.”***

En el artículo 20 apartado c del Convenio nº 129 de la OIT (ratificado por España el 5 mayo de 1971 y también en vigor), relativo a la inspección del trabajo en la agricultura, se establece una redacción similar.

b.- Normas internas específicas:

En nuestro ordenamiento interno, el artículo 10 de la Ley 23/2015, de 21 julio Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (en adelante LOITSS), también regula este deber de sigilo de forma expresa:

*"1. Los funcionarios del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social considerarán confidencial el origen de cualquier queja de que conozcan, en el ámbito de la función inspectora, sobre incumplimiento de las disposiciones legales.*

2. También vendrán obligados a observar secreto y a no revelar, aun después de haber dejado el servicio, los datos, informes o antecedentes de que puedan haber tenido conocimiento en el desempeño de sus funciones, salvo para la investigación o persecución de delitos públicos, en el marco legalmente establecido para la colaboración con la Administración Laboral, la de la Seguridad Social, la Tributaria, la de lucha contra el fraude, en sus distintas clases, y con comisiones parlamentarias de investigación, en la forma que proceda."

El artículo 10 del Real Decreto 138/2000, de 4 febrero Aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se pronuncia en la misma línea señalando:

*"1. Los funcionarios del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social deberán guardar secreto respecto de los asuntos que conozcan por razón de su cargo, así como sobre los datos, informes, origen de las denuncias o antecedentes de que hubieren tenido conocimiento en el desempeño de sus funciones, en los términos del artículo 12 de la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.*

2. El personal sin funciones inspectoras que preste servicios en órganos y dependencias del sistema de inspección queda sujeto a los mismos deberes de sigilo acerca de lo que conozca por razón de su puesto de trabajo."





En base a la normativa relacionada, el alcance de este deber de sigilo no se limita, en el caso de las denuncias, a guardar secreto sobre la identidad del denunciante sino también a la propia existencia de una denuncia, considerando absolutamente *"confidencial el origen de cualquier queja"* y *"no manifestarán al empleador o a su representante que la visita de inspección se ha efectuado por haberse recibido dicha queja"*. La consideración como "pública" de esta información es contraria a este deber de reserva y, en el caso que nos ocupa, la solicitud de referencia no se ajusta a ninguno de estos supuestos en los que cede el deber de reserva legal (artículo 10.2 de la Ley 23/2015).

Asimismo, **este deber de reserva es específico** para todos los empleados públicos que prestan servicios en el Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social y **presenta una especial intensidad que lo diferencia del deber de reserva general** que corresponde a todos los empleados públicos. Recordemos que el artículo 53 apartado 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público al señalar los Principios éticos que deben informar la conducta de los empleados públicos, establece que los empleados públicos: *"Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público."*

Por tanto, el deber de reserva que regula la Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social es más amplio e intenso que ese deber general de sigilo. La obligación no se limita a mantener *"la debida discreción"* y a no *"hacer uso de la información obtenida para beneficio propio"*.

La redacción de la Ley 23/2015 es tajante al prohibir, de forma específica y más allá de la propia relación de servicio, la difusión de cualesquiera *"datos, informes o antecedentes de que puedan haber tenido conocimiento"*. El objetivo claro es la protección de los derechos e intereses de las personas afectadas por las actuaciones inspectoras bien como denunciante, como sujetos investigados o como meros afectados por la misma de forma directa o indirecta.

La propia Ley también nos indica en qué supuestos no resulta aplicable esta prohibición y será, exclusivamente, *"para la colaboración con la Administración Laboral, la de la Seguridad Social, la Tributaria, la de lucha contra el fraude, en sus distintas clases, y con comisiones parlamentarias de investigación, en la forma que proceda"*.

c.- En último término debemos señalar que el artículo 14.1 de la Ley 19/2013, establece como límite del derecho de acceso a la información pública (apartado e) *"La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios"*, así como (apartado j) *"El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial"*. En el caso que nos ocupa existe un deber específico de reserva que deriva tanto de una Ley específica como de Tratados Internacionales ratificados por España, sin que la solicitud se ajuste a ninguno de los supuestos en que cede el citado deber de secreto profesional.

**Cuarto:** Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, lo que está solicitando [REDACTED] es una estadística completa de todas las actuaciones e infracciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con un nivel de desglose muy detallado y de un período de 8 años.







Lamentablemente, debemos indicar que no existe en nuestro sistema informático una consulta que nos permita acceder a la información solicitada, con el nivel de detalle requerido. Por tanto, no es posible extraer la información solicitada sin realizar un desarrollo informático específico para poder identificar las actuaciones, sanciones propuestas.

Asimismo, el nivel de detalle requerido (provincia y municipio) convierte la petición en una tarea inviable. Recordamos a la solicitante que en España existen 50 provincias, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y, según datos del Instituto Nacional de Estadística, 8.131 municipios. Por consiguiente, no resulta posible técnicamente extraer la información solicitada de forma automatizada. Por si esto no fuera suficiente, la información solicitada abarca un período de 8 años.

Como ya se ha señalado, para extraer esta información las únicas soluciones serían realizar un desarrollo informático específico (con el correspondiente coste económico) o realizar consultas manuales. En el segundo de los supuestos sería preciso realizar una consulta al sistema informático por cada mes solicitado (el período solicitado es de 8 años, por tanto 96 meses) y por cada uno de los municipios (8.131 municipios) y/o provincias (52 provincias) lo que implicaría realizar al menos 780.576 consultas en el caso de los municipios y 4.992 en el caso de los datos por provincias. Aun así, no toda la información aparecería desglosada por todos los criterios solicitados de modo que, para obtener el detalle deseado probablemente sería necesario repetir las consultas varias veces.

A modo de ejemplo, en el ejercicio 2021, el número total de órdenes de servicio finalizadas fue de 504.495 y el número de infracciones detectadas fue de 78.686. Estos datos pueden dar una idea del volumen de información de la que estamos hablando, que implican **analizar los datos de más de cuatro millones de actuaciones**. Es más, aun cuando fuera posible extraer la información en bruto, sería preciso un análisis de datos complejo para poder facilitar la presentación que, muy probablemente conllevaría tal volumen de datos que no podría ser "soportado" por las aplicaciones de ofimática más extendidas.

Por tanto, sería necesario elaborar un informe específico y exigiría una reelaboración previa para el tratamiento de los datos lo que supondría un nuevo tratamiento de la información, elaborándola "ad hoc" para cumplimentar esta petición. Esta acción obligaría a paralizar el resto de la gestión ordinaria de la unidad, impidiendo la correcta atención al servicio público encomendado.

Asimismo, al solicitar la información correspondiente a todo el territorio del Estado, se produce una distorsión que se deriva de la existencia de un traspaso parcial de las funciones y servicios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a determinadas Comunidades Autónomas. Tras la aprobación de los Reales Decretos 206/2010, de 26 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios a la Generalitat de Cataluña en materia de Función Pública Inspectora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y 895/2011, de 24 de junio, sobre traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de Función Pública Inspectora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, parte de la información solicitada debe facilitarse por el Gobierno Vasco y/o la Generalitat de Cataluña que han asumido el ejercicio de las funciones inspectoras en las materias de competencia autonómica. Por tanto, parte de estos expedientes, obran en las citadas administraciones públicas.

MINISTERIO  
DE TRABAJO  
Y ECONOMÍA SOCIAL



CSV :

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : CARMEN COLLADO ROSIQUE | FECHA : 11/10/2023 09:56 | Sin acción específica





En relación con esta cuestión y como ha indicado el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en su Criterio Interpretativo CI/007/2015, al interpretar la causa de inadmisión de una solicitud en base a lo previsto en el artículo 18.1.c de la Ley 19/2013, *"el concepto de reelaboración como causa de inadmisión ha sido interpretado por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en diversas resoluciones de tal manera que puede entenderse aplicable cuando la información que se solicita, perteneciendo al ámbito funcional de actuación del organismo o entidad que recibe la solicitud, deba: a) Elaborarse expresamente para dar una respuesta, haciendo uso de diversas fuentes de información, o b) Cuando dicho organismo o entidad carezca de los medios técnicos que sean necesarios para extraer y explotar la información concreta que se solicita, resultando imposible proporcionar la información solicitada."*

Como **conclusión**, en el caso que nos ocupa, para obtener la información solicitada se requiere la realización de un elevado número de consultas generando un volumen muy elevado de información, que además debe solicitarse a distintas unidades y órganos administrativos, incluso de otras administraciones públicas (Gobierno Vasco y Generalitat de Cataluña).

En cualquier caso y aun cuando fuera posible obtener toda la información en bruto, la elaboración de la respuesta a la solicitante implicaría la reelaboración de la misma empleando medios humanos y materiales de los que no se dispone.

Por tanto, el contenido de esta parte de la solicitud no puede facilitarse al solicitante al no estar disponible la información, salvo que se efectúe un desarrollo específico que implica una reelaboración de la información actualmente existente, siendo preciso realizar una serie de tareas que van más allá de la mera recopilación de información.

**Cuarto:** Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, la información solicitada, la relativa al número de actuaciones e infracciones, es objeto de publicidad activa por parte de este Organismo Estatal. A tal efecto, anualmente se publica un Informe con el objeto de dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 20 y 21 del Convenio 81 y artículos 26 y 27 del Convenio 129 de la OIT, y a lo establecido en los acuerdos y programas del Comité de Altos Responsables de la Inspecciones de Trabajo (SLIC) de la Unión Europea. En esos informes se recoge la información que se solicita y que puede ser fácilmente accesible.

Estos informes, hasta el correspondiente al año 2021, están disponibles en la página web de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y pueden consultarse en el Anexo de los informes, en su apartado 2, en el siguiente enlace:

[https://www.mites.gob.es/itss/web/Que\\_hacemos/Estadisticas/index.html](https://www.mites.gob.es/itss/web/Que_hacemos/Estadisticas/index.html)

En breve plazo estará también disponible el informe correspondiente a 2022.

Por cuanto antecede, la **DIRECTORA DEL ORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL RESUELVE:**







**INADMITIR PARCIALMENTE la solicitud de acceso a la información solicitada por aplicación del artículo 18.1 c) de la Ley 19/2013 y DENEGAR PARCIALMENTE en base a lo dispuesto en el artículo 14.1 e) y j) en los términos previstos en la presente resolución.**

Notifíquese esta resolución al solicitante, advirtiéndole que contra la misma, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos el plazo se contará desde el día siguiente al de notificación de la presente resolución. Ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o reclamación que se estime procedente.

LA DIRECTORA DEL ORGANISMO ESTATAL

*(documento firmado electrónicamente)*

Carmen Collado Rosique